**DIPUTADO SAMUEL GURRIÓN MATÍAS
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA
PRESENTE.**

La que suscribe Diputada **PAOLA GUTIÉRREZ GALINDO, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, a nombre propio, me permito presentar a esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que:

LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, INTEGRADO POR LA CÁMARA DE SENADORES Y LA DE DIPUTADOS PARA QUE SE ABSTENGAN DE APROBAR EL PROYECTO DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, POR CONSIDERAR QUE EN SU TEXTO Y POR ENDE EN SU APLICACIÓN, CONTEMPLA ACTOS DE INTERVENCIÓN VIOLATORIOS A LOS DERECHOS HUMANOS.

Fundamento lo anterior, al tenor de la presente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

a) Ante la actual ola de violencia que se vive en diferentes Estados del país, el Gobierno Federal de manera fallida ha buscado retomar el control de la seguridad con la intervención de las fuerzas armadas, lo que ha traído consigo la oposición de múltiples organizaciones de sociedad civil y académicos de renombre que constantemente han señalado que las iniciativas presentadas en el Congreso Federal para emitir una Ley de Seguridad Interior, sólo buscan normalizar la labor de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, contraviniendo con ello las recomendaciones internacionales, derivadas de indicios de graves violaciones a derechos humanos cometidas por las mismas, en los últimos años.

La política de actuación permanente de las Fuerzas Armadas, en un marco más amplio de seguridad pública, fue plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el Eje 1, Objetivo 8, que a la letra señala: **“Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado”**. En las dos primeras estrategias de este objetivo se señala: **“ESTRATEGIA 8.1... El Gobierno está determinado a reducir los espacios en que se mueven los criminales, localizar y posteriormente eliminar los plantíos de enervantes e interceptar cargamentos de droga por tierra, mar y aire**. Se destinarán los recursos necesarios para modernizar la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Aeronaval de la Armada de México, en particular para poner a su alcance los avances de la tecnología, de la información y de la digitalización. Mediante ésta y otras medidas, se buscará apoyar a las Fuerzas Armadas en sus labores como garantes de la seguridad interior del país, y específicamente en el combate al crimen organizado. Estrategia 8.2... **Se implementarán operativos permanentes en coordinación con los tres órdenes de gobierno, para asegurar a distribuidores de droga al menudeo, así como un sistema de inteligencia para combatir la existencia de centros de distribución de drogas y laboratorios clandestinos**; sin embargo, dichas estrategias trajeron consigo una relación poco sana entre las fuerzas armadas y la ciudadanía de los espacios donde se desplegaron los operativos. Datos oficiales señalan el incremento de quejas formales en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por presuntas violaciones a derechos humanos en contra de la ciudadanía, bajo el siguiente contexto: de 182 quejas recibidas en el año 2006, se incrementaron a 367 en 2007, y para 2008 se incrementaron a

1230. Por el contrario, no existen datos precisos sobre la efectividad de los operativos permanentes derivados de la fallida estrategia gubernamental.

Llama la atención que alguna de las iniciativas con las que se pretende dar pie a la Ley de Seguridad Interior otorgaría al Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y a cualquier fuerza de seguridad pública federal, la facultad de realizar labores de vigilancia por “cualquier método de recolección de información”.

Cito de manera textual la parte conducente de la iniciativa en comento: “...**Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias, considerando los aspectos estratégico y operacional, la cual tendrá como propósito brindar apoyo en la toma de decisiones en materia de Seguridad Interior.** Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información...”

La ambigüedad y amplitud de este término es un ejemplo claro de la peligrosidad de una normatividad de esta naturaleza, pues de aprobarse un texto como el citado, se facultaría a las Fuerzas Armadas y a cualquier fuerza de seguridad pública federal para intervenir comunicaciones y recolectar información privada de cualquier persona, a través de cualquier método, sin distinción y sin que se establezca ningún control judicial o cualquier otro mecanismo de rendición de cuentas.

b) Éste, es otro dato que refleja contundentemente, la fallida política y terquedad de mantener a las Fuerzas Armadas haciendo labores para las cuales no están capacitados, ni se encuentran en ninguna esfera de competencia, ya que ellas fueron creadas para salvaguardar la soberanía del país y no para combatir a la delincuencia organizada; por lo que según estándares internacionales, la tasa de defunciones por homicidios, refleja que en nuestro país, del año 2000 al 2007, se vivió un periodo de baja violencia, curiosamente este es el periodo inmediato anterior a la implementación de la multicitada y fallida estrategia de operativos permanentes. En el periodo mencionado, se registraban en promedio cerca de 10 mil homicidios anuales. Fue después de iniciados los operativos permanentes que se destapó una ola de violencia a nivel nacional, llegando a más de 27 mil homicidios en 2011; entre 2007 y 2011 se triplicó su nivel pasando de 9 mil a 27 mil, y la tasa pasó de 8.1 a 23.7 homicidios por cada mil habitantes.

Por otro lado, diversos organismos internacionales de defensa de los Derechos Humanos han recomendado a nuestro país la pertinencia de retirar a las Fuerzas Armadas de las actividades de seguridad pública, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, recomendó: **Considerar en el corto plazo el retiro de las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública y de la aplicación de la ley penal como una medida para prevenir las desapariciones forzadas. Adoptar legislación, normas y protocolos para regular el uso de la fuerza por parte del ejército y todas las corporaciones policiales como una medida preventiva respecto a las desapariciones forzadas, conforme a los principios de necesidad, racionalidad, proporcionalidad, legalidad y total respeto a los derechos humanos.**

Garantizar la jurisdicción de los tribunales civiles, en todos los asuntos relacionados con las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos en general, independientemente de que el perpetrador sea personal militar.

Por su parte, en el Informe del Relator Especial sobre la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, se observa la recomendación a nuestro país para retirar definitivamente a las fuerzas militares de labores relacionadas con la seguridad pública y restringir su participación a operaciones de apoyo con supervisión de órganos judiciales

civiles.

c) Por último, en el Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, recomiendan a nuestro país lo siguiente:

- Adoptar todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares.
- Enmendar el Código de Justicia Militar para que todas las violaciones de los derechos humanos presuntamente cometidas por militares sean objeto de investigación exhaustiva, procesamiento y juicio por autoridades civiles. Se deberían transferir de inmediato todas esas causas a la jurisdicción civil.
- Aumentar el número de efectivos de la policía civil. Según la información recibida, solo la mitad de los estados cuentan con una presencia policial que esté por encima del nivel mínimo recomendado por las Naciones Unidas.

La evidencia empírica es contundente, los datos son reveladores, necesitamos combatir la violencia con políticas públicas que combatan sus orígenes, no solo aquellas que reaccionan o coaccionan, hay que proteger a nuestra ciudadanía pero también a nuestras instituciones de un claro desprestigio por la necesidad de unos cuantos. Las Fuerzas Armadas de nuestro país se encuentran facultadas y entrenadas para salvaguardar la soberanía nacional, actividad sin duda alguna loable, pero la seguridad interior y pública debe, en todo momento, correr a cargo de fuerzas civiles, entrenadas, capacitadas y con una actuación bajo protocolos claros y que protejan los Derechos Humanos de todas y de todos.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, propongo a esta soberanía de este Honorable Congreso del Estado, se apruebe el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, INTEGRADO POR LA CÁMARA DE SENADORES Y LA DE DIPUTADOS PARA QUE SE ABSTENGAN DE APROBAR EL PROYECTO DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, POR CONSIDERAR QUE EN SU TEXTO Y POR ENDE EN SU APLICACIÓN, CONTEMPLA ACTOS DE INTERVENCIÓN VIOLATORIOS A LOS DERECHOS HUMANOS.

TRANSITORIO:

ÚNICO: El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

ATENTAMENTE

DIP. PAOLA GUTIÉRREZ GALINDO

San Raymundo Jalpan, Oaxaca, 15 de mayo de 2017.

San Raymundo Jalpan, Oaxaca, 15 de mayo de 2017.

**LIC. IGMAR FRANCISCO MEDINA MATUS
OFICIAL MAYOR
EDIFICIO**

La que suscribe Diputada **PAOLA GUTIÉRREZ GALINDO**, integrante de la **Fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, de la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca**, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca, a nombre propio, me permito presentar a esta Honorable Soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, por el que:

LA LXIII LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, EXHORTA AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, INTEGRADO POR LA CÁMARA DE SENADORES Y LA DE DIPUTADOS PARA QUE SE ABSTENGAN DE APROBAR EL PROYECTO DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR, POR CONSIDERAR QUE EN SU TEXTO Y POR ENDE EN SU APLICACIÓN, CONTEMPLA ACTOS DE INTERVENCIÓN VIOLATORIOS A LOS DERECHOS HUMANOS.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DIP. PAOLA GUTIÉRREZ GALINDO